

Víctimas del terrorismo. ¿Víctimas de la política?

Las víctimas del terrorismo, durante la mayor parte de los casi cuarenta años de esta lacra en España, han sido marginadas y abandonadas a su suerte. Contra esta situación indigna, y para reivindicar los derechos de las víctimas, se han ido creando asociaciones y fundaciones a lo largo de las dos últimas décadas no exentas de dificultades, de dentro y fuera de ellas, ni de enfrentamientos entre sí y con los partidos políticos. El segundo aniversario del 11-M así lo mostró e hizo palpable la necesidad urgente de que los partidos, perseguidores incansables de votos, dejen de manipular a las víctimas para que no lo sean también de los intereses políticos.

Víctimas, asociaciones y subvenciones

El 3 de abril de 2004 moría Francisco Javier Torronteras en la explosión del piso de un grupo de Al Qaeda en Leganés (Madrid). Hasta el día de hoy, este GEO de la Policía Nacional es la última víctima del terrorismo de una lista que supera el millar de muertos y que se inició con el asesinato del guardia civil José Pardines Arcay a manos de ETA el 7 de junio de 1968 en Villabona (Guipúzcoa). Aunque varias son las organizaciones terroristas de todo signo que han actuado en nuestro país (GRAPO, FAC, MIL, Terra Lliure, GAL, Ultraderecha) han sido ETA y Al Qaeda las que más conmoción y dolor han provocado con 817 y 192 asesinatos imputados a cada una de ellas.

Pero no sólo quienes perdieron la vida son víctimas del terrorismo, también son víctimas los que sobrevivieron a los atentados con secuelas físicas y/o psicológicas, sus familias y sus amigos. Víctimas que, además, se

han quejado durante estos casi 40 años de terrorismo por no recibir, o al menos no suficientemente, el reconocimiento debido de la sociedad, lo que ha añadido a su tragedia un nuevo dolor: la marginación, el olvido e incluso el desaire de los ciudadanos, de las administraciones públicas y del entorno social.

Con la intención de acabar con esta situación injusta se han ido fundando diversas asociaciones: la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que en la actualidad representa a más del 90% de las víctimas, en 1981; SOS Atentados en 1986; la Fundación Gregorio Ordóñez en 1995; el Foro de Ermua y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE) en 1998; la Asociación Víctimas del Terrorismo Verde Esperanza en 2000; la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT) en 2002; la Associació Catalana de Victimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT) en 2003; la Asociación 11 de Marzo-Afectados de Terrorismo y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M en 2004...

Un rosario de asociaciones que, aunque mucho han recorrido en el reconocimiento de las víctimas, no terminan de alcanzar sus objetivos y, a menudo, caminan entre discordias, como se deduce de algunos hechos. Por ejemplo, la independización de la delegación en Cataluña de la AVT por sentirse relegados creándose así la ACVOT. Por ejemplo, la fundación de la Asociación 11-M que surgió por iniciativa de algunos afectados al constatar severas deficiencias de atención por parte de los poderes públicos y las asociaciones ya existentes, y cuatro meses más tarde la de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M por motivos idénticos. O, por ejemplo, los manifiestos de los tres Congresos Internacionales Víctimas del Terrorismo (celebrados en Madrid en 2004, Bogotá en 2005 y Valencia en 2006) que reiteran, junto a la denuncia de la injusticia del terrorismo y la proclamación de la inocencia de las víctimas, la necesidad del apoyo, la asistencia y el recuerdo de éstas.

Hasta las subvenciones se han convertido en causa de enfrentamientos. En el año 2004 la AVT obtuvo ayudas por valor de 213.000 euros, más de la tercera parte de los 600.000 euros destinados a todas las asociaciones. Después del 11-M el Ministerio de Interior otorgó una subvención especial de 120.000 euros cuyo reparto produjo un conflicto entre la AVT y la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo, pues esta nueva asociación pasó a ser de las que más dinero recibió (se le asignaron 80.000 de los 120.000 euros). Mientras, la AVT, que asegura representar a un número igual o superior de afectados del 11-M, recibió los 40.000 euros restantes. En el enfrentamiento entre ambas asociaciones también influyó el hecho de que el Gobierno concediera a las víctimas del 11-M la Medalla al Mérito en el Trabajo, algo que no se ha hecho con ninguna otra víctima y que la AVT ha considerado un agravio.

Los partidos políticos andan por medio

Con estos antecedentes, el pasado 11 de marzo, en la conmemoración del segundo aniversario del atentado terrorista de Atocha, el madrileño parque del Retiro se convirtió en testigo de las discordias entre partidos políticos y víctimas. La «terrible matanza» del 11-M —dijo el Arzobispo de Toledo— lamentablemente está siendo origen de «división y peligroso enfrentamiento».

Dos años antes, la tragedia de Atocha no sólo sembró el dolor en las víctimas y la sociedad española, sino también la enemistad entre el PP y el PSOE a la búsqueda de los responsables del atentado, todo ello con una influencia sobre los resultados en las elecciones generales. Esta enemistad se tradujo en distanciamiento y ruptura que aumentaron con cada una de las reformas que el Gobierno ha ido haciendo sin el consenso social demandado por la oposición.

Nada se salvó de esta confrontación. El Gobierno, con el objetivo de coordinar la atención a las víctimas, creó el Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (RD 2.317/2004, de 17 de diciembre) nombrando a Gregorio Peces Barba para el cargo. Dos meses después, en su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso, Peces Barba reconoció que lo que él pensó como una tarea tranquila y pacífica no lo estaba siendo pues se había encontrado, además de con otras situaciones complicadas, con una fuerte división entre las víctimas.

La AVT y el Partido Popular enseguida pidieron la renuncia del Alto Comisionado afirmando que él era la causa de la división y arguyendo tres razones. Primero, no había participado en la manifestación en apoyo a las víctimas y en contra de la excarcelación de presos de ETA; segundo, había mostrado una no esperada «comprensión hacia el entorno etarra» al plantear a la AVT que abriese un debate sobre una hipotética amnistía a los presos de ETA sin delitos de sangre (algo que Peces Barba ha negado en repetidas ocasiones haber dicho), y, tercero, había acusado a la AVT de partidista sin percatarse de que su nombramiento fue una decisión unilateral de Zapatero.

En febrero, el Alto Comisionado, al tiempo que anunciaba que dejará el cargo a finales del próximo verano, denunció que el PP estaba utilizando a las víctimas con fines electoralistas. Pero, por desgracia, afirmar que los políticos tienen intereses espurios en sus relaciones con las víctimas del terrorismo y sus asociaciones no era ninguna novedad, ya que las víctimas siempre han sabido que eran utilizadas por los partidos. Así lo declaró

Irene Villa en una entrevista reciente: «Soy totalmente consciente de que los políticos siempre me han utilizado», y si lo ha permitido —continuaba diciendo— ha sido para «servir de altavoz de la gente que sufre».

¿Vale todo en política con tal de ganar unas elecciones? ¿Qué límites deberían marcarse los políticos? ¿Acaso no están todos los partidos del lado de las víctimas? ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de las alianzas entre asociaciones y partidos políticos para la consecución de los fines de las primeras?

Dolor, justicia y esperanza de las víctimas

De todo esto parece inferirse una serie de planteamientos mínimos ante esta situación. **En primer lugar**, parece que ni los partidos políticos ni las asociaciones deberían acaparar más atención que las víctimas y las necesidades de las víctimas. Los testimonios de las víctimas hablan de tristeza, miedo, angustia y necesidad de expresar el dolor. El terrorismo les ha infligido injustamente un sufrimiento que no tiene ninguna explicación y al que, en no pocos casos, se ha añadido un sentimiento de abandono por parte de la sociedad.

En segundo lugar, parece que las víctimas piden, a la sociedad en general y a las instituciones en particular, pruebas de afecto para acompañar a su desolación; apoyo para superar, o al menos mitigar, las dificultades de más que les impuso la barbarie, y justicia para restituirles, en la medida de lo posible, sus derechos de ciudadanos arrebatados violentamente.

Como se comprueba en las **Comisiones de la Verdad** que ha habido en la historia, impedir que vuelvan a cometerse las mismas barbaries exige esclarecer la verdad y juzgar los crímenes para que, en un segundo momento, puedan reconciliarse las partes enfrentadas y que las víctimas perdonen a los victimarios.

Muchas veces las víctimas se habrán preguntado de qué ha servido la muerte de más de mil asesinados y el sufrimiento de todos los que han sobrevivido. A pesar del dolor y el sinsentido, las víctimas nunca han perdido la esperanza de alcanzar la paz y nunca han caído en la trampa de los terroristas del uso de la violencia. Ellas siguen creyendo en el Estado de Derecho y en los valores democráticos. ■